

Carlos de la Torre*

PROTESTA Y DEMOCRACIA EN ECUADOR: LA CAÍDA DE LUCIO GUTIÉRREZ**

CON LA DESTITUCIÓN del presidente Lucio Gutiérrez el 20 de abril de 2005, son tres los mandatarios ecuatorianos depuestos antes de concluir su período y ocho las personas que han ocupado la Presidencia desde agosto de 1996. En la cesación de Gutiérrez se repitieron los rituales que se dieron en los conflictos que terminaron con los mandatos de Abdalá Bucaram en febrero de 1997 y de Jamil Mahuad en enero de 2000. Al igual que estos, Gutiérrez fue cesado por una combinación de movilizaciones “populares” y maniobras de dudosa legalidad de los legisladores de oposición, que involucraron a las fuerzas armadas como “garantes” del orden democrático y como últimos intérpretes de quién debería ser el presidente. Es así que una vez más se vinieron al suelo los sueños de los arquitectos de la última transición a la democracia y de la Constitución de 1998, que buscaron forjar un sistema político estable, gobernable y moderno que escapase de los ciclos de populismo-cambio ilegal de gobierno. Al igual que en el pasado, el populismo en Ecuador

* PhD en Sociología. Profesor Coordinador de Estudios Políticos en FLACSO-Ecuador.

** El presente trabajo se basa en parte en mi investigación “Populismo, democracia, protestas y crisis políticas recurrentes en Ecuador”, publicado en *Europa América Latina* 2006 (Río de Janeiro: Fundación Konrad Adenauer) N° 21.

sigue siendo una fuerza fundamental en la política, y persisten las prácticas clientelares, corporativistas y canibalísticas entre los políticos. A diferencia del pasado, los militares no ocupan directamente el poder, más bien avalan los actos de dudosa legalidad de los políticos. Pese a los altos costos para la institucionalidad de las fuerzas armadas, estas continúan siendo los últimos jueces de la política.

El presente artículo analiza las protestas y las visiones de la democracia articuladas durante la última crisis política en Ecuador, contextualizándolas dentro de las crisis de 1997 y 2000. Durante estos episodios se evidenció que, a diferencia de los académicos que aceptan la definición de la poliarquía o de la democracia liberal como las más útiles para la reflexión y el análisis, para la mayoría de los ecuatorianos la definición de democracia está en juego, por lo que es importante analizar detalladamente cómo la entienden. Sólo una minoría acepta la visión liberal y para muchos la democracia se basa en la representación directa de la voluntad popular sin representantes y en actos litúrgicos en los cuales el pueblo expresa su voluntad apropiándose de los espacios públicos.

Este caso es además interesante e irónico, pues Gutiérrez irrumpió en la política cuando lideró los eventos que terminaron en la destitución del presidente Mahuad en enero de 2000 y fue “víctima” de protestas y conspiraciones que terminaron en su destitución en abril de 2005. Si bien tanto el 21 de enero de 2000 como los eventos de abril de 2005 fueron calificados como golpes de Estado por los mandatarios defenestrados (Gutiérrez, 2005) y sus colaboradores, algunos líderes de los movimientos sociales, políticos, académicos y partícipes los vieron como la escenificación de la verdadera democracia.

El artículo está dividido en seis secciones. La primera describe cómo Gutiérrez llegó al poder. Luego se discuten brevemente los parámetros institucionales y culturales dentro de los que tuvo que gobernar. La tercera sección estudia la crisis política que se dio dentro de un contexto de estabilidad económica. A continuación se estudian las protestas en contra de Gutiérrez y se las compara con los actos de acción colectiva que se produjeron durante los procesos que culminaron en las destituciones de Bucaram y Mahuad. La quinta explica las diferentes visiones de la democracia articuladas durante estos episodios de acción colectiva. La última revisa las respuestas estatales, que se caracterizaron por niveles relativamente bajos de represión.

DEL GOLPE DE ESTADO A LA PRESIDENCIA

El coronel Lucio Gutiérrez incursionó en la política cuando lideró junto a Antonio Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), un golpe de Estado o rebelión popular en contra del presidente Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000. Pese

a que existe una amplia bibliografía sobre el tema, nunca se conocerá con certeza lo que ocurrió ese 21 de enero, pues una amnistía del Congreso a los involucrados selló la posibilidad de conocer el verdadero rol que jugaron las fuerzas armadas. Parecería que al menos hubo cinco conspiraciones. De acuerdo con Napoleón Saltos (2000a; 2000b), catedrático universitario y líder de la Coordinadora de Movimientos Sociales, que tuvo un papel protagónico en estos acontecimientos, se dieron dos conspiraciones que involucraron a los movimientos sociales y a los militares. En la primera, Antonio Vargas (presidente de la CONAIE), Napoleón Saltos y otros líderes de los movimientos sociales sostuvieron conversaciones con coroneles del ejército, entre los que se destaca Gutiérrez, sobre la importancia de reemplazar al gobierno de Mahuad y establecer una nueva democracia (Vargas, 2000: 43). Es importante anotar que no todos los líderes de la CONAIE estuvieron de acuerdo y al tanto de dichas conversaciones (Lluc en Lucas, 2000; Pacari, 2004). Los líderes de los movimientos sociales que dialogaron con los mandos medios también discutieron y coordinaron acciones con el alto mando del ejército, en particular con los generales Carlos Mendoza y Telmo Sandoval (Vargas, 2000; Saltos, 2000a: 171). Además de esta conspiración, en sus memorias, el general Carlos Mendoza Poveda (2000) acusa a Benjamín Ortiz, ministro de Relaciones Exteriores de Mahuad, de tratar de instigar un autogolpe de Estado que fue frenado no sólo por la falta de interés de las fuerzas armadas sino también por las fisuras entre los colaboradores del presidente Mahuad (Herrera Araúz, 2001: 27). El coronel Jorge Luis Brito (2000) describe una cuarta conspiración en la que los generales Mendoza y Sandoval maniobraron junto al vicepresidente Gustavo Noboa para que reemplazara a Mahuad. Este complot nominado como la defensa del orden constitucional, aparentemente, fue también el privilegiado por algunos políticos. De paso se menciona una quinta conjura del presidente del Congreso Juan José Pons, quien quería emular los sucesos del 7 de febrero de 1996, cuando se destituyó a Bucaram y no se permitió que la vicepresidenta Rosalía Arteaga ocupara el solio presidencial, que pasó a manos del presidente del Congreso de ese momento, Fabián Alarcón.

Si bien no se conocen con exactitud los detalles de las conspiraciones y el rol de las fuerzas armadas, los acontecimientos del 21 de enero son más claros. La CONAIE y la Coordinadora de Movimientos Sociales propusieron que se establecieran los parlamentos de los pueblos. Estos fueron entendidos como formas de democracia directa y como un poder dual ante un gobierno y un Estado que fueron calificados como poco democráticos y representativos, por lo que se demandó que los parlamentos de los pueblos reemplazaran a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La estrategia consistió en que, además de

paralizar las carreteras, un grupo de indígenas tomaron los edificios de los tres poderes. El 20 de enero los manifestantes cercaron el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el 21 los militares que resguardaban el edificio del Congreso permitieron la entrada de los casi 7 mil manifestantes, en su mayoría indígenas (Hernández et al., 2000: 18; Herrera Araúz, 2001: 56). Estos ingresaron junto a 195 oficiales menores del ejército, de la Escuela Politécnica del Ejército, de la Academia de Guerra y 150 “Héroes del Cenepa” (en referencia al último conflicto armado con Perú). En el Congreso se posesionó la Junta de Salvación Nacional integrada por el presidente de la CONAIE, el coronel Gutiérrez, y el ex presidente de la CSJ, Carlos Solórzano. Luego de que el alto mando militar retirara su apoyo al presidente Mahuad, que nunca renunció y que calificó a este evento como un golpe militar, este debió salir del Palacio de Gobierno. Los ocupantes del edificio del Congreso se dirigieron junto a otros manifestantes al Palacio de Gobierno. Una vez que ingresaron, comenzaron las negociaciones entre los coroneles y el alto mando militar. Acordaron que Gutiérrez fuese reemplazado por el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto que además estaba encargado del Ministerio de Defensa. Luego de pocas horas, Mendoza comunicó a Vargas y a Solórzano:

Señores, esto queda disuelto, renuncio, yo me voy [...] Los líderes de la CONAIE le rogaron que no se retire, que espere “una semanita, un mesecito, unos días más” [...] Vargas quiso volver a cerciorarse: ¿Entonces nos deja? Mendoza cerró la charla con un “se quedan los dos solos...”. Y se fue como vino (Hernández et al., 2000: 77-78).

La siguiente, en cambio, es la versión del coronel Brito (2000: 103):

[Vargas, el presidente de la CONAIE] les acusó a los generales Mendoza y Sandoval de traidores y además dijo “señores generales, nosotros no queremos el poder; queremos que ustedes se hagan cargo del poder [...] impidan que los políticos y los banqueros corruptos nos quiten el pan de la boca”.

Las fuerzas armadas fueron partidarias de la llamada sucesión constitucional y argumentaron que, como Mahuad había abandonado el poder, Noboa era su legítimo sucesor. Noboa tomó posesión de la Presidencia de la República en el Ministerio de Defensa en la madrugada del 22 de enero y luego de unas horas fue ratificado por el Congreso Nacional.

Varias razones se han expuesto para explicar esta rebelión o golpe de Estado. La más importante fue el sentimiento de indignación provocado por las políticas económicas del gobierno de Mahuad. La economía ecuatoriana entró en una crisis generalizada (ver Cuadro 2).

La inflación pasó del 36% en 1998 al 52% en 1999 y al 96% en 2000. El desempleo se incrementó del 11% en 1998 al 14% en 1999. El Producto Interno Bruto (PIB) por habitante se redujo del 0,6% en 1998 al -7,6% en 1999. Dentro de este contexto de crisis generalizada, y con niveles de hiperinflación que literalmente se comían los salarios, provocó gran indignación el uso de los fondos del Estado para rescatar a la banca privada. El congelamiento de los depósitos y las revelaciones de que Mahuad financió su campaña electoral con las contribuciones de banqueros a los cuales favorecieron sus políticas de Estado fueron interpretados por gran parte de la población como actos de corrupción intolerables.

Las fuerzas armadas y sectores nacionalistas de la población se sintieron traicionados por la firma de la paz con Perú, en la que supuestamente el gobierno de Mahuad cedió gran parte del territorio nacional. La falta de claridad sobre cuál sería el papel de las fuerzas armadas luego de esa paz y la reducción del presupuesto de dichas fuerzas molestaron profundamente a los militares. Estos además habían sufrido los efectos de la depreciación de sus salarios por la inflación, el congelamiento de sus depósitos y el incremento de sus deudas en dólares por la vertiginosa caída del sucre ante el dólar (Álvarez Grau, 2000: 76). Los sentimientos nacionalistas del ejército y de la población de la sierra se exacerbaban con la discusión sobre las autonomías regionales y el temor de que Guayaquil se separase de Ecuador.

Gutiérrez, en su proclama del 21 de enero, cuando desconoció la autoridad del presidente Mahuad, del Congreso y de la CSJ, articuló una concepción populista sobre la democracia: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, y haciendo gala de ese derecho, en forma soberana, democrática, mayoritaria y directa, sin representantes, ha elegido a sus representantes” (Herrera Araúz, 2001: 62-64). Y más tarde ese día, cuando respondió a las acusaciones del presidente Mahuad de haber protagonizado un golpe de Estado, expresó: “Es una elección soberana, es una elección directa, es una elección mayoritaria” (Herrera Araúz, 2001: 96).

De acuerdo con Gutiérrez, dado que la democracia radica en el pueblo, no se necesitan canales institucionales para expresar su voluntad. La verdadera democracia es plebiscitaria y se la vive cuando se ocupan espacios públicos. Es por esto que la “toma” del Congreso por los indígenas de la CONAIE, por militares de rango medio y por sectores de izquierda de Quito fue vivida como un momento en el cual el pueblo se hacía dueño de uno de los pilares del poder político del que se sentía excluido y no representado (Dieterich, 2000; Herrera Araúz, 2001).

Gutiérrez utilizó la retórica populista de confrontación del pueblo, que él dijo encarnar, en contra de la oligarquía simbolizada por los “políticos corruptos”. Se presentó como una persona de origen popular que ha triunfado y se ha sacrificado por su patria. Pese a sus orígenes

sociales humildes (proviene de una familia de colonos de la Amazonía) y al color oscuro de su piel, llegó a puestos de prestigio en las fuerzas armadas, confirmando las creencias de que estas constituyen un mecanismo de movilidad social. Cuando sintió el “llamado” de su patria, no dudó en liderar los eventos del 21 de enero de 2000, a los que interpretó como “una revolución nacida de las entrañas mismas del pueblo ecuatoriano”, en la que lo “podían matar, o podía ir preso, o podía perder la carrera militar” (Dieterich, 2000: 62-64).

Para participar en las elecciones de 2002, organizó la Sociedad Patriótica (SP), un partido político formado por ex militares y ex policías con una ideología nacionalista. La ideología autoritaria y nacionalista de la SP, como lo señala Bertha García (2005), tenía raíces en la formación militar de sus integrantes. Apoyándose en la Doctrina de Seguridad Nacional, que tanto Gutiérrez como los ex militares aprendieron en su formación militar, la SP sentía un gran desdén tanto por los políticos como por la política, entendida como el debate innecesario sobre lo público. Durante la campaña electoral de 2002 apeló a la unidad de los indígenas, del pueblo y de los militares, ejemplificada el 21 de enero, como la alternativa a la “pseudo democracia” ecuatoriana. Su triunfo se explica, en parte, por sus alianzas con la izquierda ecuatoriana y el movimiento indígena. Pero también por la buena acogida de su retórica de la antipolítica y la imagen de los militares como gente del pueblo que no se vende a intereses antinacionales. En una entrevista, por ejemplo, manifestó que usa el traje safari verde militar “porque a la gente le gusta verme vestido así y no como aniñado [niño bien]” (*El Comercio*, 2002).

Gutiérrez obtuvo el 21% del total de los votos en la primera vuelta electoral de octubre de 2002 y el 55% en la segunda vuelta, cuando derrotó al multimillonario Álvaro Noboa, otro *outsider* de la política. El triunfo de Gutiérrez fue interpretado por sectores de izquierda como la posibilidad de que se produjera una refundación del país. La participación del movimiento indígena y el hecho de que dos de sus líderes históricos fuesen nombrados como ministros de Agricultura y de Relaciones Exteriores parecía indicar un nuevo renacer. Norman Whitten (2003), por ejemplo, calificó a estos eventos como “inversiones simbólicas”: momentos de cambio social que no necesariamente significan la alteración del orden social pero que manifiestan grandes cambios de las relaciones sociales de herencia colonial en un país en que por primera vez los indígenas y un hombre proveniente de la Amazonía y de piel más mestiza que blanca ocupaba la Presidencia.

EL SISTEMA POLÍTICO

Cuando fue posesionado el 15 de enero de 2003, Gutiérrez se enfrentó con las mismas disposiciones institucionales –como el presidencialis-

mo, la segunda vuelta electoral y la adopción de un sistema de votación mayoritario y de listas abiertas— que habían dificultado que sus antecesores pudiesen gobernar y que contribuyeron a los derrocamientos de los presidentes Bucaram en 1997 y Mahuad en 2000 (Burbano de Lara, s/f; Pachano, 2004). Los partidos políticos se habían fragmentado e incrementado en número. Desde el retorno a la democracia, al menos nueve listas han competido en las diferentes elecciones y al menos nueve partidos han tenido algún tipo de representación en el Parlamento (Pachano, 2004: 73). Los partidos funcionan como maquinarias electorales personalistas y, junto con los políticos, están desacreditados en los sondeos de opinión pública. Es más, las destituciones semilegales de los presidentes Bucaram, Mahuad y Gutiérrez por el Congreso evidencian que la democracia entendida como el respeto a los procedimientos no siempre se cumple. De la misma manera, una condición básica de la democracia, que implica que se respete la voluntad de los ciudadanos en las urnas, no se cumple desde febrero de 1997, pues tres presidentes que ganaron elecciones libres fueron sustituidos con artimañas legales.

Estudios empíricos han demostrado que los partidos políticos ecuatorianos de diferentes ideologías se relacionan con los pobres a través del clientelismo (Menéndez-Carrión, 1986; Freidenberg, 2003; Burgwall, 1995). El clientelismo funciona como una herramienta de dominación y como una estrategia de los pobres para conseguir recursos. La legitimidad de los caciques depende de los recursos y de la información que puedan distribuir entre sus redes. Los pobres apuestan a varios caciques y estos no tienen más lealtad con un político que la que les dicta la capacidad de dicho político de “hacer obras”. Con una mentalidad de suma cero, los políticos están más interesados en captar los recursos del Estado para asegurar la lealtad de clientelas a través de la distribución de recursos que en respetar los procedimientos democráticos (De la Torre, 2000: 86). El continuo intercambio entre favores y votos ha ido conformando una cultura política basada en lealtades particularistas. Ya que los políticos no hacen valer los derechos universalistas que están escritos en las constituciones, como por ejemplo el acceso a la salud o a la educación, sino que hacen favores a grupos específicos, como ayudar a conseguir una cama en un hospital o un cupo en la escuela, los derechos son entendidos y vividos como favores. La mayoría de los pobres no son reconocidos como personas con derechos y obligaciones, ni tampoco se ven a sí mismos como ciudadanos. Sus prácticas cotidianas para sobrevivir los sitúan en relaciones de dominación, amistad y lealtad con políticos que hacen favores y dicen amar y sacrificarse por los pobres. Si a esto se añade la ausencia de un Estado de Derecho, que proteja a todos los individuos de la violencia estatal y de los abusos de poder de los poderosos, no sorprende la importancia de las redes clientelares para la sobrevivencia de los pobres.

La fragmentación de los partidos políticos, su falta de representatividad nacional y la importancia del clientelismo y el corporativismo como formas de representación local y regional se han manifestado en la baja votación alcanzada por los candidatos presidenciales. Como lo ilustra el Cuadro 1, los candidatos que han ganado las elecciones presidenciales pasaron a la segunda vuelta con menos del 30% del total de los votos (a excepción de Durán y Mahuad) y, en el caso de Gutiérrez, con apenas el 21%.

Cuadro 1

Porcentaje de votos obtenidos en las elecciones presidenciales (1979-2002)

Año elección	Candidato	Partido	Votos primera vuelta (%)	Votos segunda vuelta (%)
1979	Jaime Roldós	CFP	27,70	68,49
	Sixto Durán Ballén	PSC	23,86	31,51
1984	León Febres Cordero	PSC	27,20	51,54
	Rodrigo Borja	ID	28,73	48,46
1988	Rodrigo Borja	ID	24,48	54,00
	Abdalá Bucaram	PRE	17,61	46,00
1992	Sixto Durán	PUR	31,88	57,32
	Jaime Nebot	PSC	25,03	42,68
1996	Abdalá Bucaram	PRE	26,28	54,47
	Jaime Nebot	PSC	27,17	45,53
1998	Jamil Mahuad	DP	34,92	51,17
	Álvaro Noboa	PRE	26,61	48,83
2002	Lucio Gutiérrez	PSP	20,64	54,79
	Álvaro Noboa	PRIAN	17,39	45,21

Fuente: Elaboración en base a datos del Tribunal Supremo Electoral.

Con estas restricciones institucionales, y debido a la importancia del clientelismo para conseguir y mantener votos, no asombra que los presidentes que, con la excepción de Rodrigo Borja durante los dos primeros años de gobierno, no obtuvieran una mayoría en el Parlamento, tuviesen que recurrir a la compra de votos de legisladores y a buscar alianzas con políticos que no tienen alicientes para pactar más allá de la búsqueda de prebendas particularistas para distribuir entre la clientela de su provincia.

Cuando Gutiérrez ganó la Presidencia en la segunda vuelta electoral, su partido SP alcanzó únicamente 5 diputados de un total de 100, por lo que no tuvo más opción que buscar el apoyo de los llamados legisladores independientes incurriendo en escándalos con la compra de votos. Luego de su ruptura con el movimiento indígena y el partido de izquierda Pachakutik a los seis meses de estar en el poder, gobernó con una alianza electoral bajo la mesa con el derechista Partido Social Cristiano (PSC). Esta alianza se rompió luego de las elecciones para dignidades locales

del 17 de octubre de 2004, en las que triunfaron los partidos tradicionales y en las que apenas sobrevivió la SP. En noviembre de 2004, los ex presidentes León Febres Cordero, líder del PSC, y Rodrigo Borja, líder del partido socialdemócrata Izquierda Democrática (ID) y los diputados de Pachakutik buscaron seguir un juicio político a Gutiérrez. Este sobrevivió armando una nueva mayoría legislativa con dos partidos personalistas y populistas, el PRE de Abdalá Bucaram y el PRIAN del millonario Noboa. El gobierno sorprendió a la oposición cuando una nueva mayoría de legisladores acaparó la presidencia del Congreso, conformó un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y cesó a la CSJ reemplazándola por una nueva con personalidades ligadas al PRE y al PRIAN.

A partir de noviembre de 2004, Gutiérrez radicalizó su retórica populista al presentar estas maniobras como parte de la lucha ética y moral entre el pueblo, al que dijo encarnar, y la oligarquía ligada al ex presidente León Febres Cordero, símbolo de la derecha gamonal ecuatoriana, sus empresas familiares y los políticos de siempre. La lógica populista de Gutiérrez fue inicialmente exitosa. No sólo logró desmovilizar a la oposición, sino que pudo neutralizarla y sumar aliados que compartieron su odio a Febres Cordero. La estrategia del gobierno también consistió en profundizar las divisiones del movimiento indígena.

Luego de la ruptura de Gutiérrez con la CONAIE, la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE) vio en él la posibilidad de captar organismos y recursos estatales que estaban en manos de la CONAIE. Sus intereses coincidieron con la estrategia del gobierno de dividir a la CONAIE, cuya participación había sido importante en los derrocamientos de dos presidentes. Durante el gobierno de Gutiérrez se vio a una CONAIE fragmentada y paralizada frente a una FEINE movilizada y apoyada por el gobierno.

Lo que parecía un éxito del gobierno para fines de 2004, al menos en cuanto logró mantenerse en el poder con una nueva mayoría parlamentaria, con un movimiento indígena fragmentado y dividido y unas fuerzas armadas controladas por personas leales al presidente, se transformó en una crisis política que concluyó con su salida en abril de 2005.

UNA CRISIS POLÍTICA

A diferencia de las crisis que terminaron con las caídas de Bucaram y Mahuad, que se dieron en contextos de *paquetazo* económico¹, y de la crisis económica generalizada de 1999-2000 (ver Cuadro 2), Gutiérrez fue cesado pese a la relativa estabilidad económica que vivió el país durante su período y a la ausencia de un *paquetazo* económico.

¹ En enero de 1997 aumentaron los precios de los servicios básicos del “gas de uso doméstico en un 245%, la energía eléctrica en un 300%, el transporte en un 60% y los teléfonos en cerca de 1.000%” (*El País*, 1997: 2).

Gutiérrez asumió el poder cuando la economía empezaba su recuperación y se afianzaba la dolarización durante el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2002) (López-Cálix, 2003). Al igual que otros neopopulistas (Roberts, 1995; Weyland, 1996), si bien durante su campaña electoral se manifestó opositor a las políticas neoliberales, apenas subió al poder firmó una carta de intención con el FMI y nombró a tecnócratas ligados a grupos empresariales para que dirigieran su política económica ortodoxa (Burbano de Lara, 2003). Es por ello que los sectores de izquierda que lo habían apoyado se sintieron traicionados por el “coronel [que] mató pronto las esperanzas” (Acosta, 2004).

Cuadro 2
Indicadores macroeconómicos selectos

Año	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Crecimiento del PIB por persona (%)	2,4	0,6	-7,6	1,3	3,6	1,9	1,2	4,5
Inflación (%)	30,6	36,1	52,2	96,1	37,7	12,5	7,9	2,7
Tasa de desempleo (%)	9,2	11,5	14,4	9,0	10,9	9,2	11,5	s/d
Balanza comercial	179.497	-511.534	1.699.815	966.809	38.451	-908.005	-777.229	-36.153

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el economista Hugo Jácome, de FLACSO-Ecuador, en 2006.

La política del gobierno resultó en la estabilización de la economía. Como lo indica el Cuadro 2, se puede observar que el nivel de inflación bajó del 12,5% en 2002, al 7,9% en 2003 y al 2,7% en 2004. La reducción de la inflación permite que los actores puedan prever sus prácticas económicas y reduce el empobrecimiento de los sectores medios y pobres que dependen de un salario. También se dio un crecimiento del PIB por persona que llegó al 4,5% en 2004. Esta recuperación se basó en los altos precios del petróleo y en las remesas de divisas provenientes de emigrantes que bordearon el 6% del PIB (Sánchez, 2004: 53). El 45% de las remesas no viene de Estados Unidos sino de países de la Comunidad Europea, en especial España e Italia (Sánchez, 2004). Sin embargo, como también lo demuestran estos datos, la dolarización tiene cuellos de botella en la balanza comercial y en la poca productividad de la economía (Larrea, 2004b). Además, no ha logrado solventar los problemas estructurales de un desempleo que alcanzaba el 11,5% en 2003, pese a la migración que comprendió al 3% de la población económicamente activa (López-Cálix, 2003: 6), ni de un subempleo que afectaba al 40% de la fuerza laboral (Larrea, 2004a: 48). Los niveles de pobreza, que

llegaron al 68% en mayo de 2000, se redujeron al 49% en diciembre de 2001 y al 45% en 2003 (Larrea, 2004a).

En este contexto de estabilidad macroeconómica, con políticas monetarias ortodoxas y fieles a los designios del FMI y con un equipo de tecnócratas aprobados por las elites empresariales, era difícil imaginar que se produjera una crisis política y que Gutiérrez no pudiera terminar su gobierno. Los errores políticos de Gutiérrez, junto a su debilidad institucional que lo obligó a aliarse con el PRE y el PRIAN, explican su caída.

LAS PROTESTAS

Las protestas masivas en contra del gobierno de Gutiérrez comenzaron el 26 de enero, cuando Jaime Nebot, el alcalde del PSC de Guayaquil, convocó a una manifestación a la que mayoritariamente asistieron personas de estratos superiores por la autonomía provincial y que pedían que el gobierno cambiase sus políticas. Un mes después, miles de quiteños –de clase media para arriba– marcharon por el Estado de Derecho que había sido violentado con la designación de la CSJ, en contra de la violencia estatal y de los atentados y amenazas en contra de periodistas y políticos de la oposición (Levoyer, 2005: 20).

El regreso de Bucaram de su exilio por ocho años en Panamá, el 2 de abril de 2005, fue uno de los detonantes de la indignación moral de muchos ciudadanos de clase media para arriba en contra del régimen de Gutiérrez. Bucaram pudo regresar al país gracias a que el presidente de la CSJ, Guillermo Castro, militante de su partido político e íntimo amigo suyo, revocó las órdenes judiciales en su contra. El espectáculo mediático del retorno del exiliado líder populista marcó el futuro de Gutiérrez, y se convirtió en una de las razones principales que condujeron a su caída. Es así que una de las consignas que más se escucharon durante las protestas de abril en Quito fue “que se vaya Bucaram y también su edecán”, en referencia a que el presidente Gutiérrez había servido en este rol durante el corto gobierno de Bucaram (agosto 1996-febrero 1997).

Junto al retorno de Bucaram, la radicalización del discurso de Gutiérrez en cuanto a que la lucha era entre la oligarquía corrupta que no pagaba sus deudas y el pueblo, encarnado en él, polarizó al país en una lucha maniquea entre el gobierno y la oposición. En esta disputa, algunos políticos de la oposición golpearon las puertas de los cuarteles, como cuando el alcalde de Quito, Paco Moncayo, y el prefecto de Pichincha, Ramiro González, miembros del partido socialdemócrata ID, en asambleas públicas y con el aplauso de los asistentes, pidieron a los militares que retirasen su apoyo a Gutiérrez. Las protestas, que habían ido subiendo de tono durante el mes de marzo, llegaron a proporciones masivas en Quito y Cuenca a partir del 13 de

abril. A través de una pequeña emisora de Quito, Radio La Luna, que abrió sus micrófonos al público, y de mensajes por celulares, miles de personas, en su mayoría de clase media, se convocaron para salir a las calles. Para el 20 de abril la situación, en palabras del comando conjunto de las fuerzas armadas, era insostenible. Para evitar el derramamiento de sangre, retiraron su apoyo al presidente, que poco antes había sido cesado en sus funciones por una nueva mayoría del Congreso, que argumentó que había abandonado el poder cuando en realidad estaba atrincherado con un fuerte resguardo policial y militar en el Palacio de Gobierno en Quito.

Resulta interesante y muy relevante notar que tanto los medios de comunicación como gran cantidad de ciudadanos comunes sostienen que el gobierno de Gutiérrez cayó en las calles. Esta visión ilustra, por un lado, la creencia de que las protestas en sí mismas tienen la fuerza para deponer presidentes. Es así que se han construido las caídas de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez como producto de grandes movilizaciones populares, dejando de lado el rol de los políticos y de las fuerzas armadas en sus destituciones. Las aseveraciones de que la democracia está en las calles también demuestran que, para muchos actores, la democracia es entendida como la ocupación de espacios públicos.

La incorporación de sectores que habían estado excluidos de la política se inició con el populismo de José María Velasco Ibarra (1934-1935; 1944-1947; 1952-1956; 1960-1961; 1968-1972). A diferencia de interpretaciones que privilegian el respeto a las normas liberales y la construcción de instituciones, lo democrático se entendió desde el velasquismo como la ocupación de espacios públicos y la participación litúrgica en rituales en los que los líderes populistas escenifican la voluntad popular a través de discursos maniqueos en contra de la oligarquía (De la Torre, 2000).

La estrategia del gobierno de Gutiérrez ante quienes cuestionaban su popularidad fue presentar los sondeos de opinión pública que le adjudicaban una popularidad de alrededor del 35% –un récord en el país luego de dos años de gobierno– y hablar de las encuestas de “carne y hueso”, esto es, de las muchedumbres que vitoreaban al presidente. Gutiérrez creyó que en las calles y en las plazas es donde se expresa la verdadera democracia. Es por ello que la estrategia del gobierno fue responder a las manifestaciones de la oposición con contra-manifestaciones. Por ejemplo, la marcha de la oposición por la democracia en Quito fue respondida con una contra-manifestación a la que se llevó gente en ómnibus desde varias provincias. Poco importaron las críticas de que se pagaba a los que se manifestaban a favor del gobierno o las denuncias de que el grupo de choque progubernista “Cero Corrupción” estuviese integrado por personas con antecedentes penales. Lo que va-

lió fue tener gente en las calles para defender al gobierno y demostrar a la opinión pública su popularidad medida por el número de asistentes a estos actos plebiscitarios.

Si bien la estrategia de llenar las vías públicas le falló al gobierno, la oposición poco a poco le fue ganando terreno hasta que lo desbordó, luego de que Gutiérrez descalificara como “forajidos” a quienes protestaron a partir del 13 de abril. Muchos ciudadanos buscaron llegar a los espacios desde donde se ejerce el poder para apoderarse de sus símbolos. La creencia de que tanto Bucaram como Mahuad habían sido echados por las protestas populares funcionó como un mito movilizador. Muchos buscaron repetir estas hazañas soportando las descargas de gases lacrimógenos e intentando sortear las barricadas con las que Gutiérrez se había acorralado en el Palacio de Gobierno.

Además de tomar los espacios donde están los símbolos del poder, las muchedumbres atacaron las instituciones que reflejaron lo que interpretaron como la “politiquería” y la “corrupción” de la época de Gutiérrez. Es así que se rompieron los vidrios de los edificios donde sesionó el Congreso, y se atacó y golpeó a algunos diputados (Hurtado, 2005). Uno de los blancos de la violencia colectiva fue el Ministerio de Bienestar Social. Este se convirtió en el símbolo de lo que muchos ciudadanos vieron como lo peor de Gutiérrez y sus colaboradores, esto es, el uso de los bienes públicos para las políticas de patronazgo y clientelares del gobierno (Pérez, 2005). En la mañana del miércoles 20 de abril, los antigutierristas buscaron defender a Quito de quienes fueron traídos en ómnibus para apoyar al gobierno. Varios opositores fueron hacia el Ministerio de Bienestar Social, donde en un combate con piedras y palos de a poco fueron ganando terreno a los defensores del gobierno. Luego de que se disparara desde el edificio y desde afuera hiriendo a dos personas, alguien lanzó un cóctel *molotov* y comenzó el incendio del edificio del Ministerio. Se utilizó el fuego para erradicar lo que muchos vieron como la podredumbre del Ministerio, y así purificarlo.

En un interesante trabajo sobre las protestas de abril de 2005, Franklin Ramírez Gallegos (2005) destaca su carácter novedoso. A diferencia de las protestas lideradas por organizaciones de los movimientos sociales y por los partidos políticos, los manifestantes se autoconvocaron a través de Internet, teléfonos celulares y llamadas a Radio La Luna. Se utilizaron tácticas y repertorio de la vida cotidiana como fueron las cacerolas y el papel higiénico para protestar, por ejemplo, en el *cacerolazo* del 13 de abril y el *rollazo* del 16. Muchos jóvenes usaron las consignas de las barras del fútbol, “poguearon” o bailaron chocando sus cuerpos y saltando, y “zapearon” buscando ambiente, como en las noches de farra, y encontrando amigos. A diferencia de los paros y las

huelgas, se utilizó la noche para protestar. De esta manera los partícipes, que fueron en su mayor parte de clase media, podían trabajar durante el día.

Además de tener aspectos novedosos, durante estos episodios se activaron las formas de protesta que la gente normalmente utiliza. Es por ello que muchos jóvenes colegiales y universitarios –que además, según la Cruz Roja, constituyeron la mayor proporción de heridos atendidos durante las protestas– atacaron con piedras a los policías, pues protestar para ellos significa entrar en una confrontación. La mayor parte de quienes protestaron pertenecía a la clase media. Los estudiantes de derecho de la Universidad Católica fueron los primeros en manifestar su descontento con la forma en la que se destituyó a la CSJ y se nombró a una nueva. Algunas ONG de clase media como Participación Ciudadana estuvieron al frente y fueron las primeras víctimas de la violencia del grupo de choque “Cero Corrupción”. Las organizaciones –tanto políticas como sociales, como la CONAIE– que fueron protagonistas durante las protestas contra Bucaram y Mahuad estuvieron ausentes. La única organización que actuó fue la FEINE de los indígenas evangélicos, que marcharon para defender al gobierno.

Si bien valores universalistas y abstractos como la defensa del Estado de Derecho y de la democracia motivaron a muchos a protestar, durante estos episodios se evidenció el clasismo y a veces el racismo de quienes utilizan valores como la democracia para descalificar y silenciar a quienes fueron construidos como carentes de racionalidad. Siguiendo con una larga trayectoria en la cual se construye a los seguidores populistas como masas ignorantes, desorganizadas y peligrosas, y a sus líderes como exponentes de todo lo negativo de la democracia, durante estas protestas se conformaron oposiciones binarias que legitimaron como ciudadanos a unos, diferenciándolos de los acarreados y pagados por el gobierno. Esta estrategia discursiva articulada por los medios de comunicación y por los comentarios de ciudadanos que se dieron a través de la línea abierta de Radio la Luna diferenció a los ciudadanos de los acarreados; a quienes se movilizaron por valores de quienes lo hacen por la paga; a los habitantes de Quito, que supuestamente encarnan valores y formas de ser cultas, de las hordas invasoras de provincianos; a los quiteños de los “monos” (costeños) y de los “jíbaros” amazónicos. Este discurso clasista, regionalista y a veces racista llevó a que estudiantes amazónicos de FLACSO, por ejemplo, fuesen atacados por ser supuestamente gutierristas.

Cuadro 3

Movilizaciones en contra de Bucaram (1997), Mahuad (2000) y Gutiérrez (2005)

Actores de las movilizaciones		
1997	2000	2005
Frente Unitario de Trabajadores Cámaras de la producción Asamblea de Quito Jóvenes organizados por grupos de izquierda Mujeres Partidos políticos Indígenas Clase media y media alta Sectoros populares	CONAIE Coordinadora Movimientos Sociales Héroes Cenepa Oficiales menores FF.AA. Jóvenes de izquierda Indígenas	ONG FEINE (indígenas evangélicos) Grupos ad hoc (Ruptura 25) Clase media y media alta Jóvenes Mujeres Jóvenes de grupos de izquierda (el último día)
Formas de protesta		
1997	2000	2005
Levantamiento indígena Toma de iglesias Paro/huelga Marchas Ocupación de espacios públicos Humor y subversión de símbolos de poder	Levantamiento indígena Toma de símbolos de poder estatal Humor y subversión de símbolos de poder	Toma de espacios públicos Formas de celebración del fútbol, música Uso de objetos cotidianos (cacerolas, papel higiénico, etc.) Marchas nocturnas Humor y subversión de símbolos de poder
Valores		
1997	2000	2005
No a la corrupción No al neoliberalismo Democracia No al estilo chabacano de Bucaram Defensa de la cultura Defensa de Quito (contra turcos, monos, lúmpenes)	No a la corrupción No al neoliberalismo Refundar la democracia	No a la corrupción Contra el autoritarismo Defensa del Estado de Derecho Fuera todos No al TLC Defensa de Quito (ciudadanos versus acarreados, monos, amazónicos, evangélicos)
Contexto de las movilizaciones		
1997	2000	2005
Paquetazo económico Debilidad institucional del presidente Paz con Perú	Crisis económica y financiera Paz con Perú	Estabilidad económica Debilidad institucional del presidente

Fuente: Elaboración propia.

El Cuadro 3 ilustra algunas diferencias y continuidades de las formas de movilizaciones, de los actores, los valores y los contextos en que se dieron las protestas en contra de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez. Lo que primero llama la atención es que los actores principales de las protestas contra Bucaram y Mahuad, esto es, los indígenas de la CONAIE, estuviesen ausentes en las movilizaciones contra Gutiérrez. En estas estuvieron presentes los indígenas evangélicos que, siguiendo las pautas de comportamiento de la CONAIE, buscaban espacios de poder estatal que estaban en manos de ella. El movimiento obrero, que tuvo una fuerte participación en las protestas contra las políticas de ajuste de los ochenta (León y Pérez, 1986), tuvo su último protagonismo en las movilizaciones contra Bucaram. También es importante notar el declive de los partidos como líderes de las movilizaciones en Quito. Los actores que más se destacan son los jóvenes, que tienen menos obligaciones que los adultos, por lo que los costos de su participación son menos altos. Las clases medias y medias altas se movilizaron en contra de Bucaram y Gutiérrez y estuvieron ausentes en la caída de Mahuad, que fue el episodio de movilizaciones con actores de origen social más humilde. Los más pobres estuvieron ausentes en las movilizaciones contra Gutiérrez, y presentes en las que se hicieron a su favor.

Las formas de protesta han cambiado junto a los actores. Los sindicatos han privilegiado las huelgas y los paros, que debido a la crisis y debilidad del movimiento obrero han ido perdiendo importancia como formas de acción colectiva. Desde los años noventa, los indígenas inventaron un nuevo repertorio de protesta con los levantamientos, que son formas de acción colectiva en las que las comunidades bloquean las carreteras y marchan hacia los centros del poder político provincial o nacional. Como lo señala Ramírez Gallegos (2005), los grupos no organizados o poco organizados de clase media que protestaron contra Gutiérrez utilizaron estrategias de la vida cotidiana y de la fiesta, y se concentraron y marcharon por las noches para no interferir en los horarios de trabajo.

Pese a estas diferencias, perduran algunas formas a través de las cuales se manifestaron la indignación y la disconformidad con los presidentes defenestrados. La más importante es que quienes protestan no se contentan con concentrarse en espacios públicos como pueden ser una plaza, una carretera o una avenida. Estos buscaron, además, apropiarse y tomar los espacios y símbolos del poder estatal. Ello explica que la estrategia de los manifestantes no fue sólo reunirse y escuchar discursos, sino llegar al Palacio de Gobierno. El éxito de las movilizaciones que terminaron con los gobiernos de Bucaram y Mahuad hizo que funcionaran como mito movilizador de que el pueblo puede tumbar gobiernos durante las protestas contra Gutiérrez. Una

segunda forma de protesta, que convive con las innovaciones tanto de los levantamientos indígenas como de las protestas de abril, fue buscar la confrontación con la policía. Protestar en Ecuador es un ritual en el que los manifestantes hacen barricadas para impedir la circulación. Cuando aparece la policía se da una lucha ritual entre las pedradas de los manifestantes y los gases, piedras y a veces toletazos con los que los agentes del orden les responden. La tercera continuidad es el uso del humor para burlarse y subvertir los símbolos del poder. Es así que, en enero de 2000, los indígenas obligaron a que señores mestizos bien trajeados bailaran, se pintaran la cara y tomaran un trago. También los jóvenes de clase media utilizaron el humor y las formas de vivir el fútbol y la fiesta en las protestas contra Gutiérrez y Bucaram.

Los valores que guiaron las protestas fueron éticos y morales. Las principales razones fueron el malestar por la corrupción; la indignación moral porque se ha roto el pacto social de dominación al utilizar de forma descarada las prácticas habituales de coima y soborno durante el gobierno de Bucaram (De la Torre, 2000); el descaro del gobierno de Mahuad de salvar a la banca inepta y corrupta con el erario público; o la indignación por cómo las instituciones estatales fueron acaparadas por familiares de Gutiérrez. Todos ellos fueron motivos para que muchos salieran a las calles. Junto a esta indignación moral también se articularon valores que rechazan el modelo económico neoliberal, pues rompe con una serie de pactos y entendimientos de lo que debe ser la dominación justa en la que el Estado da una serie de beneficios, como son los subsidios, y tiene una serie de compromisos con diferentes sectores de la población. Las clases media alta y alta también se movilizaron por valores estéticos que abarcan desde cómo debe comportarse un primer mandatario hasta consideraciones sobre el origen social y étnico de los presidentes. A estos grupos les molestó el estilo chabacano y “vulgar” de Bucaram y Gutiérrez, quienes además fueron vistos como advenedizos sociales por sus orígenes étnicos de “turco contrabandista” o “amazónico de color verde”. Un buen ejemplo del regionalismo, clasismo y racismo de las elites es el editorial del renombrado intelectual Simón Espinosa con el que llamó a la desobediencia civil de los quiteños en contra de Bucaram:

Quito en este régimen está condenado a muerte por abandono. Los quiteños a ser granpateados en las oficinas. Los periodistas y los indios a ser plantados en las entrevistas por *una raza insolente, malcriada, infatuada* (Hoy, 1996; énfasis propio).

LA TAN MENTADA DEMOCRACIA

En las caídas de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez la democracia fue el valor más importante. Se pueden diferenciar tres visiones de lo que los actores

consideraron que es la democracia. La primera, la menos aceptada por la población pero que circula entre algunos académicos y políticos, es la visión normativa de la democracia liberal y el Estado de Derecho. La segunda, muy extendida entre los protagonistas del 21 de enero y articulada por algunos sectores en las caídas de Bucaram y Gutiérrez, es la visión marxista de la democracia, entendida como un sistema económico y social y como una forma de mandato político directo que no necesita de la mediación de representantes. La tercera visión es la democracia como una forma de participación en la que el pueblo ocupa directamente los espacios que simbolizan el poder político y de los cuales se sienten excluidos los de abajo. Esta visión populista de la democracia va acompañada de discursos maniqueos a favor del pueblo en contra de la oligarquía, que es vista como la fuente de todos los males de la nación.

La visión de la democracia liberal no tiene mayor acogida entre la población pues, por ejemplo, pocas voces se alzaron para cuestionar la falta de legalidad y el atropello a la normativa con la que se cesó a los tres presidentes defenestrados. En el caso más claro de golpe de Estado según esta visión, que fue la destitución de Mahuad, una encuesta realizada el 7 de febrero de 2000 señalaba que “el 51% de la población estuvo de acuerdo con la formación del triunvirato. El 72% de la población piensa que no hubo ‘golpe de Estado’ sino una ‘rebelión popular’” (Paz y Miño, 2002: 33).

Es interesante que muchos de los políticos que salieron en “defensa de la democracia” y en contra del golpe de Estado de 2000 hayan tenido prácticas poco consistentes y bastante instrumentales ante la democracia. Los ex presidentes Mahuad, Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja, pocos años antes, habían sido protagonistas del golpe de Estado en contra de Bucaram. Esto demuestra que la mayoría de los políticos ecuatorianos, y aun los que en sus escritos han calificado a este régimen como el más deseable, tienen actitudes instrumentales ante la democracia. No deja de resultar interesante que, pese a su instrumentalismo, los políticos sigan considerando que la democracia es el mejor régimen político. Desde el siglo XIX los legisladores han buscado modelos formales y constitucionales de democracia y han dictado leyes basadas en una tradición liberal importada y normativa. Estas proclamas han ido de la mano con prácticas políticas que no respetan las leyes, los principios y las constituciones liberales que ellos mismos han proclamado. Con excusas sobre la ingobernabilidad de sus compatriotas o argumentos, como los de Velasco Ibarra, de que la voluntad popular está más allá de las normas de la democracia liberal, permanentemente han violado las constituciones.

Si bien los políticos pisotean las constituciones y los procedimientos de la democracia liberal, buscan artimañas legales para ca-

muflar los golpes de Estado como movimientos basados en la legalidad. Esta búsqueda de artificios legales no sólo obedece a la necesidad de complacer al Departamento de Estado de EE.UU., que ahora es contrario a los golpes de Estado. Es sobre todo una necesidad imperiosa de basar aun los actos ilegales en un supuesto marco legal. Estas prácticas han sido una constante en la historia del país, pues los golpes de Estado fueron la excepción, y las rupturas al orden democrático se revistieron de formalidades democráticas, ya sea a través de los nombramientos por el Congreso o por asambleas constituyentes (León, 2004: 96).

Considero que este apego instrumental y esquizofrénico a la legalidad por parte de los políticos se explica por su interés de continuar con el juego democrático, en especial con las elecciones. En estas se juegan desde los egos de quienes se sienten salvadores y redentores de la patria, hasta intereses económicos y corporativos. Las elecciones, además, activan redes clientelares que permiten a los políticos, los caciques y sus clientelas obtener desde bienes y servicios hasta puestos de trabajo. A los políticos no les conviene entregar el poder a los militares, sino continuamente entrar en el juego electoral, pese a que a los pocos días de que el nuevo mandatario asuma el poder ya empiecen a intrigar acerca de cómo tumbarlo para seguir con el ciclo de destituciones hechas con artimañas legales y nuevas elecciones.

Otra característica de las defensas a la democracia liberal, también herencia del siglo XIX, es que se basan en un menosprecio a los de abajo. El miedo, la aversión y el asco de las elites hacia sus compatriotas más pobres y menos blancos han ido de la mano con la idea de que la democracia liberal es una empresa civilizadora que educará y modernizará a los de abajo, siempre vistos como no preparados aún para ejercer sus derechos democráticos. Esta ambigüedad entre defender la democracia liberal y temer al “populacho” es una constante en la forma en que las elites políticas han entendido a la democracia.

La visión marxista sobre la democracia fue la más articulada durante el 21 de enero de 2000, pero también fue la posición de sectores de izquierda durante las caídas de Bucaram y Gutiérrez. Desde esta corriente política y filosófica, la democracia tuvo varios significados. Para empezar, fue la inspiración de la estrategia de la sublevación de enero de 2000 de construir un poder dual, y de presentar a las asambleas y parlamentos de los pueblos como instancias genuinamente democráticas. También inspiró la conformación de asambleas populares luego de la caída de Gutiérrez. La democracia para los marxistas fue entendida no sólo como un régimen político sino y, sobre todo, como una forma de convivencia social basada en políticas económicas que favorezcan a la mayoría de la población. La democracia es vista por sus resultados en tanto distribución del ingreso, gasto público del Estado,

etc. Además, se presentó a la democracia directa y sin intermediarios como una alternativa realmente participativa frente a la democracia formal-liberal. Algunos marxistas idealizan a la comunidad andina como “una organización que enfrenta al Estado” y que tiene una “visión civilizadora alternativa” (Saltos, 2000b: 216). Un buen ejemplo de esta visión de la comunidad indígena como un espacio donde se ejerce un modelo diferente y superior de democracia, basado en la participación de todos y en el consenso, es el siguiente análisis del ex presidente de la CONAIE, Luis Macas, y de los antropólogos Linda y Jim Belote sobre el movimiento indígena:

La participación de los miembros de las comunidades en los procesos de toma de decisiones se da en las reuniones de los cabildos. Esto significa que las acciones de la comunidad están gobernadas por el consenso y se mantienen discusiones hasta alcanzarlo. Se toman decisiones sobre actividades en las mingas, regulaciones de las comunidades [...] y los gastos de los fondos de la comunidad [...] Los mejores ejemplos y la expresión más completa de los esfuerzos colectivos son los varios levantamientos y marchas indígenas de los años noventa (Macas et al., 2003: 224).

El ejemplo anterior idealiza y silencia algunos problemas de estas formas de democracia directa supuestamente basadas en el consenso. Para empezar, no se toman en cuenta las diferenciaciones económicas, de género, generacionales y de nivel educativo entre los miembros de la comunidad. Se asume que todos tienen el mismo poder para que su voz sea escuchada y cuente con la misma autoridad. Se desconoce que los hombres silencian y no escuchan a las mujeres. Además se olvida que quienes han tenido acceso a la educación manejan los códigos y reglas del lenguaje (“culto” o burocrático) que les permiten que su voz tenga autoridad frente a quienes poseen menos estudios o ninguno y por lo tanto carecen de las competencias para que su voz sea escuchada (Fraser, 1999). Por último, se pasan por alto los mecanismos autoritarios y coercitivos de la comunidad, tales como las multas a quienes no participan en las acciones que han acordado la mayoría, o aquellos que se oponen a las decisiones de las mayorías y que corren el peligro del ostracismo social si osan diferir en estas comunidades pequeñas.

Una tercera manera de entender la democracia es la que yo denomino como populista (De la Torre, 2000). Esta tiene dos componentes. Por un lado, la democracia es vivida como las acciones en las que “el pueblo” expresa su voluntad ocupando los espacios públicos de los cuales se sentía y estaba excluido. La “toma” del Congreso por parte de los indígenas de la CONAIE, por ejemplo, fue vivida como un momento en

el que los indígenas se hacían dueños de uno de los pilares del poder político del que se sentían excluidos y que no los representaba. De ahí la cantidad de fotos que se sacaron en los asientos de los diputados. También esto explica la importancia que tuvieron las marchas al Palacio de Gobierno para tomar este espacio en donde reside el poder. La lucha por dominar las calles y las plazas también se evidencia en las estrategias del gobierno de Gutiérrez de tener las calles llenas de gente vitoreando al mandatario (aunque sea con *pagados*) y de la oposición de tomar las calles.

A diferencia de la democracia liberal, que se basa en el gobierno de la mayoría pero no en la unanimidad de opiniones e intereses, en el populismo no existe un campo reconocido para expresar el disenso, pues está basado en “la unión y la identidad total entre un representante y aquellos que buscan ser representados” (Plotke, 1997: 28). Quienes no son parte de los seguidores que aclaman al líder son invisibilizados, silenciados, no son tomados en cuenta y pueden ser reprimidos (Urbinati, 1998: 116-119). Las formas de representación populista tienden a no respetar el marco normativo existente, que es visto como un impedimento para que se exprese la voluntad popular encarnada en el líder. Esta actitud instrumental ante las leyes “reduce los mecanismos constitucionales a un medio que sirve al poder político, y el uso repetido de medidas y prácticas extra-institucionales debilita la autoridad del Estado y del sistema legal” (Peruzzotti, 1997: 101).

Otro elemento de esta visión populista sobre la democracia es la construcción de la política como una lucha antagónica entre el pueblo y la oligarquía. Si bien esta confrontación discursiva ha estado presente en la política ecuatoriana desde los años treinta y cuarenta, los grupos sociales asignados a estas categorías no han permanecido inmutables. En los cuarenta, Velasco Ibarra, al igual que muchos grupos de la sociedad civil, construyó los términos pueblo y oligarquía con referentes eminentemente políticos. La oligarquía fueron las “argollas” del partido liberal que se mantenía en el poder gracias al fraude electoral, y el pueblo eran los ciudadanos cuya voluntad electoral no se respetaba. Esta construcción política del pueblo excluía a quienes no podían votar por ser analfabetos y a los indígenas y afroecuatorianos, que en su gran mayoría eran analfabetos y que por lo tanto no votaban ni eran considerados como parte de la nación (De la Torre, 2000).

Desde la creación de la Concentración de Fuerzas Populares (CFP), a fines de los años cuarenta, la categoría “pueblo” adquirió significados sociales (Guerrero, 1994). El “pueblo” fue definido como los pobres que se diferencian de la oligarquía y de los ricos en términos socioeconómicos, culturales, políticos y de estilos de vida. Cuando se dio una dimensión étnica a la oposición del pueblo contra la oligarquía,

se sostuvo que la lucha es entre la “gente de ‘aristocracia’ y los ‘cholos’” (CFP, 1958: 19). Bucaram compartió esta elaboración del pueblo como las clases bajas mestizas (De la Torre, 1996). Si bien mencionó a los diferentes grupos étnicos en sus discursos, y desde el poder creó un Ministerio de las Etnias, su concepción de quién es el pueblo se basaba más en la concepción cefepista del pueblo como las clases bajas cholas que se enfrentan a los añiados que en una visión multicultural del pueblo. Bucaram no entendió los grandes cambios que se habían dado en los imaginarios políticos desde la irrupción del movimiento indígena. A partir de los noventa, los líderes del movimiento indígena y de organizaciones negras han utilizado el término “pueblo” cuando hacen demandas al Estado. Exigen pertenecer al pueblo ecuatoriano pero manteniendo su cultura o nacionalidad. El 21 de enero de 2000, los líderes indígenas y los militares encabezados por Gutiérrez articularon una visión diferente de quién es el pueblo. El verdadero pueblo son los indígenas que ocupan los espacios públicos de los cuales se sienten marginados como el Palacio de Justicia y el Congreso. Es por esto que Antonio Vargas manifestó: “El pueblo ha ganado, ni el ejército, ni los indígenas sino el pueblo ecuatoriano [...] aquí estamos indios, militares, el pueblo” (Herrera Araúz, 2001: 85). Y manifestó, durante la toma del Congreso, que “aquí confluye todo el pueblo” (Hernández et al., 2000: 48). Los indígenas, anteriormente excluidos de la construcción imaginaria del pueblo, pasaron a ser parte sustancial e importante de este. No sólo encarnaron al pueblo, sino que también fueron vistos como su vanguardia en las luchas contra la corrupción, las políticas de ajuste estructural y en defensa de la soberanía nacional.

LAS RESPUESTAS ESTATALES

Las protestas que terminaron con la caída de los tres presidentes tuvieron muy poca represión. Durante la caída de Bucaram, murió una persona y en la caída de Gutiérrez, dos –una por asfixia y la otra en un accidente automovilístico. ¿Qué factores explican estos bajos niveles de represión?

El primer factor tiene que ver con el carácter regionalizado del sistema político ecuatoriano. Como lo señala Jorge León (2003), una de sus características es que, debido a la fragmentación de las elites, estas han tenido que negociar la incorporación de nuevos actores. Es así que se han creado ciclos de protesta a través de los cuales sectores excluidos buscan su incorporación en el pacto corporativista ecuatoriano. Desde los años noventa, a través de movilizaciones y otras formas de protesta, los indígenas demandaron no sólo que el Estado les reconociera sus derechos culturales, sino que los incorporara a su dirigencia y a su intelectualidad en el aparato estatal, controlando la educación bilingüe,

la etno-medicina o programas de etno-desarrollo. La incorporación corporativista tiene efectos contradictorios. Por un lado, la sociedad se democratiza al incluir a quienes antes estaban marginados, pero esta incorporación puede terminar desmovilizando, pues los líderes indígenas han asumido el doble papel de representantes del Estado ante sus comunidades y de sus comunidades ante el Estado.

El movimiento indígena fue incorporado al pacto corporativista luego de la destitución de Bucaram. La Constitución de 1998 incluyó el cambio de la identidad nacional de mestizo a pluriétnico y multicultural, y se reconocieron los derechos colectivos de los indígenas. Además la CONAIE fue encargada de controlar la educación, la salud y los proyectos de desarrollo para los indígenas. Luego del 21 de enero se consolidó su incorporación con el triunfo de su candidato presidencial, Lucio Gutiérrez, en las elecciones de 2002. Parecería que la ausencia de la CONAIE en las últimas protestas no sólo se debe a los problemas de unidad interna provocados por el paso del movimiento indígena por el poder y a las políticas clientelares del gobierno de Gutiérrez que buscaron dividirlo. Su ausencia también se explica por los costos de su incorporación corporativista que los ha transformado en funcionarios del Estado. Es preciso señalar también los efectos de los proyectos de etno-desarrollo promovidos por el Banco Mundial, que despolitizaron a los dirigentes indígenas transformándolos en gestores de proyectos de desarrollo (Bretón, 2003).

La respuesta estatal no sólo ha incorporado, también se ha basado en una relación particular de las fuerzas armadas con la población. Para comenzar, las fuerzas armadas, como señala Anita Isaacs (1991), aprendieron durante la última dictadura (1971-1979) que uno de los factores más graves contra su institución son las divisiones internas. Los militares han respondido ante las protestas buscando no atentarse contra su unidad interna y han preferido “retirar” su apoyo a los presidentes antes que reprimir, por los altos costos que ello podría tener para su unidad y su imagen. Además, tanto Bucaram como Gutiérrez politizaron a las fuerzas armadas y atentaron contra su unidad interna al involucrarlas en el manejo de las aduanas y otras dependencias estatales.

Por último, como lo señala Diego Pérez Enríquez (2004), los militares actúan como si fuesen un partido político, por lo que se relacionan con los sectores pobres con la lógica asistencialista y clientelar de los partidos políticos. Esta tradición de compromiso hacia los pobres les impediría reprimir, pues ello afectaría su imagen populista-asistencialista. Si a esto se suma el hecho de que con el fin de la carrera militar recién empieza la carrera política de algunos uniformados como el mismo Gutiérrez, el alcalde de Quito o el ex general Paco Moncayo, entre otros, resulta más fácil comprender que en momentos de posible

confrontación y represión los militares opten por retirar su apoyo al presidente antes que enfrentarlo con las armas a los manifestantes.

CONCLUSIONES

Este artículo ha analizado las protestas y las visiones de la democracia que se articularon durante los eventos que terminaron en las destituciones de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez. Para empezar, y a diferencia de la visión de muchos de los actores sociales y políticos, las caídas del poder de los tres presidentes no pueden reducirse al rol de las protestas, pues tanto los políticos como los militares fueron actores institucionales clave en estos procesos. Estos tres mandatarios fueron electos con una serie de constricciones institucionales. Como lo han señalado varios politólogos (Burbano de Lara, *s/f*; Mejía Acosta, 2002; Pachano, 2004), el presidencialismo y la segunda vuelta electoral presentan una serie de dificultades para la gobernabilidad. El presidencialismo agudiza el personalismo. Además, genera dos fuentes de legitimidad, una en el Congreso y otra en la Presidencia, que no tienen mayores alicientes para cooperar y que más bien han generado una “actitud hostil, de oposición de los partidos que no están en el gobierno hacia el Ejecutivo [...] y una resistencia de los presidentes de ceder parte de su poder” (Burbano de Lara, *s/f*).

Dadas estas debilidades provocadas por las reglas del juego político, los presidentes que no han tenido mayorías en el Congreso tuvieron que pactar con partidos que no estaban interesados en la gobernabilidad sino en sus posibilidades electorales en la nueva contienda. Además, la lógica de que la política se basa más en la lógica de la guerra que en los pactos llevó a que tanto los primeros mandatarios como los políticos de la oposición utilizaran mecanismos de dudosa legalidad para mantenerse en el poder o para defenestrar al presidente. Asimismo, los políticos han involucrado a las fuerzas armadas en sus asuntos y las han llamado a ser el último intérprete de cómo se resolverían estas crisis. Los militares, debido a la necesidad de mantener su unidad interna, han avalado los actos poco legales de los políticos. A la vez, debido a su tradición de trabajo asistencialista y clientelar con los más pobres, no han reprimido a la población.

Las protestas se dieron en diferentes contextos socioeconómicos y políticos, por lo que sería necesario investigar si las hipótesis estructuralistas son suficientes o si tienen que complementarse con estudios de cómo la gente común entiende lo económico desde lo ético y lo moral. Parecería que lo económico es leído e interpretado desde visiones morales y éticas de los parámetros de la dominación aceptable (Thompson, 1991). Las protestas en contra de Bucaram, por ejemplo, se dieron por la indignación que provocó que el Estado rompiera con el pacto de do-

minación y no subsidiara servicios básicos como la luz o el gas para uso doméstico. También causó indignación el uso de los recursos estatales durante el gobierno de Mahuad en beneficio de la banca corrupta e inepta. Por último, Gutiérrez fue destituido en un contexto de recuperación económica en el que no se produjeron incrementos en los precios de los servicios básicos, no se congelaron los depósitos bancarios ni se vivió la angustia de la hiperinflación. Las protestas se debieron a valores morales, como la indignación por el retorno de Bucaram y la apropiación por parte de Gutiérrez y sus allegados de todas las dependencias estatales, a los que se sumaron valores estéticos clasistas y a veces racistas de sectores de clase media alta que vieron en Gutiérrez a un imitador de Bucaram que no tenía ni el abolengo, ni el color de la piel, ni las “buenas costumbres” necesarias para ser presidente.

El recorrido por las diferentes visiones de lo que fue la democracia para los partícipes ilustra que el respeto a las normas y procedimientos de la democracia liberal no son importantes ni siquiera para los pocos políticos que en sus escritos han disertado sobre las virtudes de esta forma de gobierno. Es más, para muchos de quienes se rebelaron, la palabra golpe de Estado no tiene mayor sentido. Por ejemplo, la líder histórica del movimiento indígena que fue ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Gutiérrez, Nina Pacari (2004), manifestó en una entrevista: “Para nosotros no hay la concepción de golpista, es otro el análisis que nosotros hacemos”.

Esta falta de arraigo de lo democrático, en el sentido liberal, en las prácticas de los políticos, de los líderes de los movimientos sociales y de los militares va junto a la debilidad de la ciudadanía y del Estado de Derecho como formas en las cuales los ciudadanos se relacionan entre sí y con el Estado. En lugar de darse una igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, hay una diferenciación entre unos pocos que están más allá de las leyes, o que sólo las obedecen cuando son de su conveniencia, y las grandes mayorías que son objeto de la fuerza represiva de la ley. La mayoría de los pobres, para subsistir, debe romper el orden legal cuando invaden terrenos para construir sus viviendas o cuando ocupan los espacios urbanos para vender en el sector informal. No sólo se trata de que la ley no regula las relaciones sociales, sino de que los pobres no pueden hacer uso de los derechos que supuestamente les otorgan las constituciones. Para acceder a los servicios públicos, por ejemplo, tienen que ir en nombre de algún poderoso que los recomiende para que los funcionarios públicos los atiendan o deben suplicar un favor a un dependiente estatal. Debido a la falta de derechos ante el Estado, los pobres muy pocas veces demandan y luchan por una ampliación del Estado de Derecho o para hacer valer sus derechos de ciudadanos. Más bien recurren a prácticas que, aunque resultan eficaces en conseguir el bien deseado, no se basan

en la ciudadanía sino en prácticas paternalistas o en prebendas y privilegios de los grupos corporativos (De la Torre, 2003).

Independientemente de su ideología política, de su visión sobre la democracia y de su etnicidad, la mayoría de los actores no tuvo reparos en aliarse con los militares. Estas tres crisis políticas terminaron cuando las fuerzas armadas retiraron su apoyo a los presidentes electos y avalaron los actos del Congreso, que designó a sus sucesores empleando artimañas legales tales como la “incapacidad mental” de Bucaram –sin pruebas psiquiátricas sobre su locura– o el abandono del poder de Mahuad y Gutiérrez, cuando estos seguían en el Palacio de Gobierno. El constante llamado de los civiles para que los uniformados les resuelvan sus problemas se ilustró en los pedidos públicos del alcalde de Quito y el prefecto de la provincia de Pichincha para que las fuerzas armadas retiraran su apoyo a Gutiérrez en marzo de 2005, o en los llamados a que los militares depusieran a Mahuad. Gutiérrez explicó su participación en el 21 de enero con estas palabras: “A través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos, la gente pedía a gritos prácticamente la actuación de los militares” (Dieterich, 2000: 60).

A diferencia de algunos líderes de los movimientos sociales que creyeron que la solución a los problemas de la democracia sería la entrega del poder a los militares, en enero de 1996, cuando el líder de la Coordinadora de Movimientos Sociales, Napoleón Saltos, visitó los cuarteles, o en enero de 2000, cuando junto a Antonio Vargas pidió que estos fueran intervenidos, los políticos, si bien involucraron a las fuerzas armadas para que les solucionaran sus problemas de gobernabilidad, no buscaron entregar el poder a los militares porque las elecciones son su razón de existir. Es así que uno de los elementos que explican la durabilidad de la democracia, a la vez que su inestabilidad, son los flirteos de los políticos para echar al gobernante de turno de manera casi constitucional, con el objetivo de que se produzcan inmediatamente nuevas elecciones.

Es interesante que la mayoría de los actores haya basado sus acciones y luego interpretado estos hechos con un lenguaje que combina elementos de la visión marxista sobre la democracia directa con la visión populista de la democracia. El marxismo ha sido la principal corriente teórica para interpretar la realidad. Esta corriente ha irradiado desde las universidades y desde los centros de “Altos Estudios Militares”, donde varios intelectuales marxistas dan cátedras y conferencias, una concepción sobre la democracia vista ya sea como políticas de Estado distribucionistas e igualitarias o como formas de expresión directa de la voluntad popular. Desde los años treinta y cuarenta, el populismo ha sido la manera privilegiada de incorporación de los sectores previamente excluidos. Las visiones marxista y populista comparten un

desdén por la democracia representativa vista, o bien como una forma de dominación de clase, o como no representativa y excluyente. Además buscan que el pueblo, categoría que es definida de acuerdo con los intereses de los líderes, sea el verdadero protagonista de la democracia. Dicho protagonismo se basa en la ocupación de espacios públicos, en discursos que resaltan sus virtudes frente a la maldad de la oligarquía y en la búsqueda de una comunidad libre de explotación donde los iguales y los pares lleguen a consensos sin la necesidad de intermediarios.

Ya que el pueblo no puede autorrepresentarse y autoconstituirse, pues no está ahí como un dato empírico, sino que es una relación de posicionalidades construidas, no se escapa de la conclusión de que siempre se necesita de expertos o de elites que expresen, articulen, descubran y glorifiquen lo que ellos consideran como lo popular. Esta búsqueda del pueblo no sólo legitima a quienes se autoproclaman como sus representantes, sino que también se basa en la exclusión de quienes no son pensados dentro del campo de lo popular y que, por lo tanto, son parte del bloque en el poder o no existen en el imaginario y el discurso político populista. En sus reflexiones sobre el jacobinismo, François Furet señaló que el principio de legitimidad revolucionaria se fundamentaba en el pueblo, una categoría “imposible de personificar” (1985: 49). El poder residía en “las manos de quienes podían hablar por el pueblo” (Lefort, 1988: 109-110). La política sólo podía tener políticos que encarnaran los buenos valores populares o enemigos del pueblo. Es así que los políticos se convirtieron en los ventrilocuos que hablan en nombre del pueblo, dicen personificarlo y lo constituyen. El pueblo se transformó en un principio de legitimidad del poder bastante ambiguo. Por un lado, los políticos tienen que personificarlo, constituirlo, mimarlo y entenderlo, por lo que orquestan manifestaciones y mítines para demostrar y escenificar la voluntad popular, y por lo que también distribuyen recursos al pueblo. Pero, por el otro, la voluntad popular sólo es pensada como un dato moral-ético homogéneo que no admite divergencias, contradicciones o variaciones, por lo que estas búsquedas de la identidad del pueblo-unitario con el líder pueden terminar en experiencias populistas autoritarias o en el totalitarismo del egócrata magistralmente analizado por Claude Lefort (2004).

Si bien las protestas han democratizado a la sociedad ecuatoriana pues, como lo han señalado los estudiosos de los movimientos sociales, los cambios siempre se han conseguido utilizando tanto mecanismos legales como actos y estrategias no institucionales (Cohen, 1986; Tilly, 1986), las protestas también pueden tener consecuencias peligrosas para la democracia. No porque protestar atente contra la institucionalidad; más bien el peligro radica en que muchos actores –como algunos de los líderes de la CONAIE en 2000 y de los movimientos sociales en

1997 y 2000 y los políticos en las tres crisis analizadas– hayan pactado y llamado a que las fuerzas armadas tengan la última palabra de cómo resolver estas crisis. ¿Hasta cuándo no reprimirán y/o decidirán tomar directamente el poder estatal?

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, Alberto 2004 “El coronel mató pronto la esperanza” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 61.
- Álvarez Grau, Vladimiro 2000 *El golpe detrás de los ponchos* (Quito: EDINO).
- Bretón, Víctor 2003 “Desarrollo y etnicidad en las tierras altas de Ecuador” en Bretón, Víctor y García, Francisco (eds.) *Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina. Ecuador en crisis* (Barcelona: Icaria).
- Brito, Jorge Luis 2000 “Es necesario tomar el poder” en Dieterich, Heinz *La cuarta vía al poder* (Quito: Abya-Yala).
- Burbano de Lara, Felipe 2003 “Lucio Gutiérrez, la política indígena y los frágiles equilibrios en el poder” en *Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe* (San José de Costa Rica) N° 6.
- Burbano de Lara, Felipe s/f “Reflexiones para una reforma política”, mimeo.
- Burgwall, Gerrit 1995 “Struggle of the poor. neighborhood organizations and clientelist practice in a Quito squatter settlement”, Disertación de PhD, University of Amsterdam, mimeo.
- CFP 1958 *¿A dónde va CFP...? Ideología y táctica cefepistas* (Guayaquil: CFP).
- Cohen, Jean 1986 “Strategy or identity: new theoretical paradigms and contemporary social movements” en *Social Research*, Vol. 52, N° 4.
- De la Torre, Carlos 1996 *¡Un solo toque! Populismo y cultura política en Ecuador* (Quito: CAAP).
- De la Torre, Carlos 2000 *Populist seduction in Latin America* (Ohio: Ohio University Press).
- De la Torre, Carlos 2003 “Movimientos étnicos y cultura política en Ecuador” en *Íconos*, N° 15.
- Dieterich, Heinz 2000 *La cuarta vía al poder* (Quito: Abya-Yala).
- El Comercio* 2002 (Quito) 9 de noviembre.

- El País* 1997 (Madrid) 6 de febrero.
- Fraser, Nancy 1999 “Repensando la esfera pública: una contribución a la crítica de la democracia actualmente existente” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 46.
- Freidenberg, Flavio 2003 *Jama, Caleta y Camello. Las estrategias de Abdalá Bucaram y del PRE para ganar elecciones* (Quito: Corporación Editora Nacional).
- Furet, François 1985 *Interpreting the French Revolution* (Cambridge: Cambridge University Press).
- García, Bertha 2005 “El 20 de abril: presente y pasado de un proyecto militar corporativo” en *Íconos*, N° 23.
- Guerrero, Rafael 1994 *Regionalismo y democracia social en los orígenes del “CFP”* (Quito: CAAP Diálogos).
- Gutiérrez, Lucio 2000 “Un país para todos los ecuatorianos” en Dieterich, Heinz *La cuarta vía al poder* (Quito: Abya-Yala).
- Gutiérrez, Lucio 2005 *El golpe* (Quito: EDINO).
- Hernández, José et al. 2000 *21 de enero. La vorágine que acabó con Mahuad* (Quito: El Comercio).
- Herrera Araúz, Francisco 2001 *Los golpes del poder al aire. El 21 de enero a través de la radio* (Quito: Abya-Yala).
- Hoy* 1996 (Quito) 19 de octubre.
- Hurtado, Edison 2005 “Lo que pasó en CIESPAL. Apuntes etnográficos sobre el poder, los medios y los sinsentidos de la violencia” en *Íconos*, N° 23.
- Isaacs, Anita 1991 “Problems of democratic consolidation in Ecuador” en *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 10, N° 2.
- Larrea, Carlos 2004a “Dolarización y desarrollo humano en Ecuador” en *Íconos*, N° 19.
- Larrea, Carlos 2004b *Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador* (Quito: Abya-Yala).
- Lefort, Claude 1988 “Interpreting Revolution within the French Revolution” en Lefort, Claude *Democracy and political theory* (Minneapolis: University of Minnesota Press).
- Lefort, Claude 2004 “La imagen del cuerpo y el totalitarismo” en Lefort, Claude *La incertidumbre democrática* (Barcelona: Anthropos).

- León, Jorge 2003 “Un sistema político regionalizado y su crisis” en Bretón, Víctor y García, Francisco (eds.) *Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina. Ecuador en crisis* (Barcelona: Icaria).
- León, Jorge 2004 “La democracia real versus la democracia idealizada. Ecuador de 1978 a 2003” en *Política*, N° 42.
- León, Jorge y Pérez, Juan Pablo 1986 “Crisis y movimiento sindical en Ecuador: las huelgas nacionales del FUT (1981-1983)” en Verdesoto, Luis (ed.) *Movimientos sociales en el Ecuador* (Caracas: CLACSO/ILDIS).
- Levoyer, Saudia 2005 “Frente a la ola de violencia el gobierno optó por el silencio” en Araujo, Diego (ed.) *El abril de los forajidos* (Quito: Hoy).
- López-Cálix, José 2003 “Maintaning stability with fiscal discipline and competitiveness” en Fretes-Cibils, Vicente et al. (eds.) *Ecuador. An economic and social agenda in the new millennium* (Washington DC: The World Bank).
- Lucas, Kintto 2000 *La rebelión de los indios* (Quito: Abya-Yala).
- Macas, Luis et al. 2003 “Indigenous destiny in indigenous hands” en Whitten, Norman (ed.) *Millenial Ecuador* (Iowa City: Iowa University Press).
- Mejía Acosta, Andrés 2002 *Gobernabilidad democrática* (Quito: Fundación Konrad Adenauer).
- Mendoza Poveda, Carlos 2000 *¿Quién derrocó a Mahuad?* (Quito: Ediecuatorial).
- Menéndez-Carrión, Amparo 1986 *La conquista del voto en el Ecuador: de Velasco a Roldós* (Quito: Corporación Editora Nacional).
- Pacari, Nina 2004 “Tuvimos un aliado miope” en *Mundo Diners*, Año XXIV, enero.
- Pachano, Simón 2004 “El territorio de los partidos, Ecuador 1979-2002” en *Partidos políticos en la región andina: entre la crisis y el cambio* (Estocolmo/Lima: International Assistance for Democracy and Electoral Assistance).
- Paz y Miño, Juan 2002 *Golpe y contragolpe. La “Rebelión de Quito” del 21 de enero del 2000* (Quito: Abya-Yala).
- Pérez, Orlando 2005 “En cada palabra de González el Ecuador retrocedía décadas enteras” en Araujo, Diego (ed.) *El abril de los forajidos* (Quito: Hoy).

- Pérez Enríquez, Diego 2004 "Fuerzas Armadas ecuatorianas: 2004" en *Ecuador Debate* (Quito) Nº 62.
- Peruzzotti, Enrique 1997 "Civil society and the modern institutional complex: the Argentine experience" en *Constellations*, Vol. 4, Nº 1.
- Plotke, David 1997 "Representation is democracy" en *Constellations*, Vol. 4, Nº 1.
- Ramírez Gallegos, Franklin 2005 *La insurrección de abril no fue sólo una fiesta* (Quito: Abya-Yala).
- Roberts, Kenneth 1995 "Neoliberalism and the transformation of populism in Latin America. The Peruvian case" en *World Politics*, Vol. 48, octubre.
- Saltos, Napoleón 2000a "El avance del bloque histórico" en Dieterich, Heinz *La cuarta vía al poder* (Quito: Abya-Yala).
- Saltos, Napoleón 2000b *La rebelión del arco iris: testimonios y análisis* (Quito: Fundación José Peralta).
- Sánchez, Jeannette 2004 "Ensayo sobre la economía de la emigración en Ecuador" en *Ecuador Debate* (Quito) Vol. 63, diciembre.
- Thompson, E.P. 1991 *Customs in common* (Nueva York: The New Press).
- Tilly, Charles 1986 *The contentious French* (Nueva York: Columbia University Press).
- Urbinati, Nadia 1998 "Democracy and populism" en *Constellations*, Vol. 5, Nº 1.
- Vargas, Antonio 2000 "Nos faltó estrategia" en Dieterich, Heinz *La cuarta vía al poder* (Quito: Abya-Yala).
- Weyland, Kurt 1996 "Neopopulism and neoliberalism in Latin America: unexpected affinities" en *Studies in comparative international development*, Vol. 31, Nº 3.
- Whitten, Norman 2003 "Epilogue" en Whitten, Norman (ed.) *Millennial Ecuador* (Iowa City: Iowa University Press).

